

I. DOCTRINA (MALAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS) DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE DE PERSONAL.

1. INTRODUCCIÓN	2
2. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3
2.1 Bases constitucionales	3
2.2 Características de la nueva regulación del derecho de acceso	4
2.3 Desarrollo autonómico en Aragón	8
3. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	9
3.1 Tipología y funciones	9
3.2 Aspectos significativos de la doctrina establecida en 2017	10
4. CONCLUSIONES	26
5. BIBLIOGRAFÍA	27

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo vamos a tratar de conocer al máximo una reciente legislación, que es innovadora y revolucionaria, ya que “abre” los archivos de la Administración al conocimiento público.

Desde estas premisas, vamos a abordar las características y algunos resultados de la vigente regulación española del derecho de acceso a la información pública, en el que hemos podido apreciar un gran cambio acaecido en los últimos años, pasando de ser un derecho con una aplicación práctica limitada a ser un derecho amplio y efectivo.

A pesar de tratarse de una regulación con un fondo constitucional, este cambio ha sido favorecido principalmente por la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) y por las posteriores leyes autonómicas que la han desarrollado.

No obstante, como todo cuando empieza, se trata de un proceso lento e inseguro con muchas resistencias a su aplicación, por lo que analizaremos los primeros pasos en la aprobación de esta Ley, que no estuvo libre de conflictos.

A partir de aquí, este trabajo va a centrarse en el relevante oficio de las autoridades independientes de garantía del derecho de acceso en la aplicación de la nueva normativa de transparencia y la interpretación de ese derecho en un único ámbito: las solicitudes de acceso a información en materia de empleo público. Para ello, debemos analizar la importancia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el cual se rige por la Ley anteriormente mencionada.

A su vez, haremos un conciso recorrido por la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, que crea el Consejo de Transparencia de Aragón, órgano colegiado que, con independencia orgánica y funcional, tiene encomendada la promoción y supervisión de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma.

2. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2.1 Bases constitucionales

La Constitución española de 1978 (en adelante CE) reconoce de forma expresa en su artículo 105.b, que «la ley regulará: [...] El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas». De esta manera queda protegido constitucionalmente, de una manera indirecta, el derecho de acceso de los ciudadanos, no como derecho fundamental pero sí como mandato al legislador para que lo regule, siendo una muestra más del nuevo Estado democrático que instauraba dicho texto.

Para determinar la protección que recibe el derecho de acceso, vemos que la CE no lo recoge dentro de los derechos fundamentales, por lo tanto, las posteriores leyes que han encargadas de regular el derecho de acceso en España no han sido tramitadas como leyes orgánicas, sino como leyes ordinarias y son inadecuadas para fundamentar una petición de amparo en cuanto que en ninguno de ellos se reconocen derechos fundamentales y libertades políticas de los incluidos como amparables en el art. 53.2 de la Constitución (véase Sentencia del Tribunal Constitucional 161/1988, de 20 de septiembre).

Además, el hecho de que el derecho de acceso se configure como un derecho autónomo, y no como una manifestación específica del derecho fundamental a la libertad de información, hace posible su expansión y reconocimiento a todo tipo de personas y para todo tipo de finalidades e informaciones en poder de la Administración. Una demostración puede ser la equiparación entre el derecho de acceso y el derecho (fundamental) a la protección de datos personales, que según Mir Puigpelat¹ « se sitúan en un mismo nivel en el juicio ponderativo que la ley obliga a efectuar para decidir cuál de los dos ha de prevalecer en caso de conflicto, sin que el hecho de que solo el segundo se configure como fundamental esté teniendo consecuencias apreciables en la doctrina de las autoridades independientes encargadas de la garantía del derecho de acceso. Por otro lado, la amplitud y rapidez de la tutela que, como se verá, están proporcionando las autoridades de garantía al derecho de

¹ MIR PUIGPELAT, O, “ El acceso a la información pública en la legislación española de transparencia: crónica de un cambio de paradigma”, *Revista catalana de dret públic*, num 55, 2017, pp. 51 y 52.

acceso, relativiza el problema que podría suponer no contar con la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De hecho, la circunstancia de que no se le considere un derecho fundamental y de que, por tanto, no deba ser regulado únicamente mediante ley orgánica del Parlamento central, ha permitido que las comunidades autónomas desarrollen las previsiones de la ley básica estatal de transparencia mediante una legislación propia que, a menudo, ha tratado de reforzar la regulación del derecho de acceso, en una *competencia regulatoria* al alza, en la que distintas leyes autonómicas han tratado de “mejorar” lo dispuesto por la ley estatal y otras leyes autonómicas precedentes ».

A pesar de que el derecho de acceso fue reconocido constitucionalmente desde un primer momento, hay que remontarse hasta 1992 para ver su regulación de una forma general pero bastante restrictiva, con la aprobación de la primera ley de procedimiento administrativo de la democracia, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), aunque durante la vigencia de aquel artículo 37 en el cual se encontraba regulado, el derecho de acceso tuvo una aplicación dificultosa y tendente a su minimización.

Por tanto, podemos concluir este apartado diciendo que aunque aparentemente estemos ante un derecho que la Constitución no recoge como fundamental y que ha sido arduamente efectivo a lo largo de la historia, su regulación actual es moderna y atrevida. Su importancia es tangible y muestra de ello es que se hayan visto aumentadas las obligaciones de publicidad activa por parte de la Administración, datos que reciben un acceso universal a través de internet y a los que podemos acudir el conjunto de la ciudadanía.

2.2 Características de la nueva regulación del derecho de acceso

En este apartado valoraremos los aspectos más relevantes que en la actualidad han propiciado un cambio en el derecho de acceso a la información pública, con la aprobación por fin de una ley específica de transparencia, acorde con los estándares internacionales: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), en vigor plenamente desde 2015.

En un primer momento, debemos diferenciar entre obligaciones activas (de transparencia), son las que la Administración debe ofrecer de oficio y obligaciones pasivas (Derecho de acceso). El objeto

del derecho de acceso es la «información pública», entendida como toda aquella información que se encuentre en poder de los sujetos sometidos a la ley, según el artículo 13 de la mencionada LTAIBG. Se debe indicar la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, teniendo un plazo de diez días para concretar cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución, como así se establece en los artículos 17.2. y 19.2 LTAIBG.

En cuanto a los sujetos obligados, el derecho de acceso recae sobre las Administraciones Públicas y alcanza de la misma manera a todas las demás entidades del sector público vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas, a los demás poderes públicos distintos del ejecutivo (en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho administrativo: contratación, personal, etc.) e incluso a sujetos privados vinculados a aquellas, derecho de acceso que se ejercerá a través de la Administración o entidad pública a la que se encuentran vinculados.

Cabe destacar también la escasa sujeción de las solicitudes de acceso a requisitos de forma, las cuales no necesitan motivación y aunque el solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información y podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución, no será causa de inadmisión. Además, las solicitudes podrán ser realizadas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión y no se admitirá el correo electrónico aunque sí puedan presentarse a través de medios telemáticos.

El ejercicio del derecho de acceso es gratuito, sin perjuicio de las exacciones que pueden exigirse por la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato distinto del original, en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable, según establece el artículo 22.4 LTE.

Hasta aquí, podríamos decir que estamos ante un derecho muy amplio y sin límites ni restricciones a la hora de acceder a él. Sin embargo, sería un grave error pensar que no las tiene. En primer lugar, el artículo 18 LTAIBG establece unas causas de inadmisión y por lo tanto serán inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes referidas a información que esté siendo elaborada, las referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, informes internos...etc, aquellas para cuya divulgación se requiera una acción previa de

elaboración, las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente (en este caso, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud) y, por último, las que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

Por otro lado, en cuanto a la regulación de las restricciones al derecho de acceso, el sistema que adopta la Ley es el de la previsión de un listado único de límites que aglutina los asuntos que pueden ser susceptibles de conflicto con el derecho de acceso, criterio adoptado por el Consejo de Europa en el Convenio sobre Acceso a los Documentos Públicos², el Convenio núm. 205 del Consejo de Europa de Acceso a los Documentos Públicos (CADP), celebrado en Tromsø (Noruega) el 18 de junio de 2009.

A pesar de que dicho Convenio no ha entrado todavía en vigor (a fecha de 6 de febrero de 2018 ha sido ratificado por nueve Estados y hacen falta 10) y de que tampoco ha sido firmado por España, ha supuesto una gran influencia para el legislador a la hora de elaborar la LTAIBG³ y, en particular, al establecerse el catálogo de límites potenciales al derecho de acceso enumerados en sus artículos 14 y 15. La LTAIBG contiene también ahora una enunciación expresa de los cuatro grandes criterios de aplicación restrictiva y casuística de los límites al derecho de acceso habituales en Derecho comparado (artículos 14, 15, 16 y 20.2 LTAIBG): el acceso solo podrá ser denegado cuando pueda ocasionar un perjuicio efectivo y no meramente hipotético para el bien jurídico protegido por el límite en cuestión (test del perjuicio); dicho perjuicio deberá ser en todo caso ponderado con los intereses públicos o privados favorables al acceso que puedan concurrir, y que pueden obligar a soportarlo (juicio de ponderación); aunque, en el juicio ponderativo, prevalezca el límite, su aplicación debe ser proporcionada y no impedir el acceso a la parte de la información solicitada no afectada por el límite de que se trate (principio de proporcionalidad y acceso parcial); y obligación de motivación suficiente por parte de la Administración de la concurrencia del límite en el caso concreto (obligación de motivación). La LTAIBG establece asimismo la aplicación de dichos criterios al acceso a datos personales, que se sujeta a ponderación y solo se excluye de manera absoluta en el caso de los datos personales especialmente protegidos –origen racial, salud, vida sexual, ideología, afiliación sindical, religión y creencias, comisión de infracciones penales o administrativas– (artículo 15 LTAIBG). A diferencia, por tanto, de otros ordenamientos, ninguno de

² MORETÓN TOQUERO, A, “Los límites del derecho de acceso a la información pública”, *Revista jurídica de Castilla y León*, número 33, Mayo 2014, p. 13.

los límites al acceso de la LTAIBG se configura como un límite absoluto (con la única salvedad de los datos personales especialmente protegidos a que se acaba de aludir): todos son límites relativos, sujetos a ponderación, y que pueden ceder ante un interés público o privado superior favorable al acceso»³.

Ahora bien, el acceso parcial recientemente mencionado y que aparece regulado en el artículo 16 LTAIBG, tiene que conservar el sentido propio de la información proporcionada y cuando el resultado sea una información distorsionada o que carezca de sentido, deberá indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.

Un capítulo de especial interés es el relativo a la publicidad activa, regulado en los artículos 5 a 11 LTAIBG, en los que se establece los tipos de informaciones que las Administraciones Públicas y demás sujetos obligados deben publicar de oficio, de forma periódica y actualizada, para así facilitar su conocimiento y evitar que los ciudadanos deban ejercer el derecho de acceso para acceder a informaciones como pueden ser: información institucional, presupuestaria, de personal, de retribuciones, de contratos adjudicados y subvenciones concedidas, etc. Es en esta materia donde podemos apreciar un gran desarrollo legislativo por parte de las Comunidades Autónomas a través de distintas leyes autonómicas.

En estos desarrollos autonómicos sobre el derecho de acceso, también podemos encontrar una previsión de sanciones específicas por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, aunque el capítulo sancionador es una de las grandes carencias de la LTAIBG, ya que no hay aparato coercitivo para incentivar la aplicación y cumplimiento y prueba de esto es que las Resoluciones de los Consejos obligan a “enseñar” información en determinados casos, pero las Administraciones Públicas pueden recurrirlas ante los tribunales ordinarios.

Por último, otra cuestión importante y en lo que vamos a hacer especial hincapié en la parte central de este trabajo, es en el establecimiento de autoridades independientes y especializadas de garantía del derecho de acceso, las cuales conocen de las reclamaciones que los ciudadanos pueden presentarles voluntaria y gratuitamente antes de acudir a los tribunales del orden contencioso-administrativo, resolviéndolas en un plazo mucho más breve que estos. Estudiaremos las autoridades con las que contamos tanto a nivel estatal (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno),

³ MIR PUIGPELAT, O, “ El acceso a la información pública...*cit.*, pp. 54 y 55.

como de las comunidades autónomas y entes locales (por ejemplo el Consejo de Transparencia de Aragón, el que luego veremos más detenidamente).

2.3 Desarrollo autonómico en Aragón

Como hemos dicho anteriormente, las Comunidades Autónomas han jugado un papel clave en el desarrollo legislativo que ha vivido el derecho de acceso a la información. En Aragón, el resultado en un contexto de cambio permanente y profundo de esta gran labor fue la promulgación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

La regulación de medidas que tienen el objetivo de conseguir la transparencia política y administrativa, así como la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos públicos, se ha ido concretando en los últimos años a nivel europeo, tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, como en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea aprobado por la Comisión el 25 de julio de 2001. También de especial relevancia resultan los parámetros definidos por el Convenio núm. 205 del Consejo de Europa de Acceso a los Documentos Públicos (CADP), destacando en su preámbulo la importancia de la transparencia de las autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista.

Nuestro modelo ha recibido una gran influencia de estas concreciones y resultado de ello fue la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE), y, de la misma manera, esta ha sido objeto de desarrollo, completada y ampliada en materia de transparencia por la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (LTA), que a su vez ha establecido los mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos que se reconoce a los ciudadanos y las ciudadanas.

Esta Ley tiene por objeto regular e impulsar la transparencia de la actividad pública en Aragón y la participación ciudadana en las políticas que desarrolla el Gobierno de Aragón, con la finalidad de impulsar el gobierno abierto en el ámbito de la Comunidad Autónoma como forma de relación del Gobierno y de la Administración con los ciudadanos y las ciudadanas.

Con el objetivo de promocionar la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma, la LTA crea el Consejo de Transparencia de Aragón, al que se le atribuye la determinación de las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso

a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

3. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3.1 Tipología y funciones

Cuando hablamos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos referimos al organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Se trata de un organismo público independiente, y por lo tanto cuenta con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada. Se rige por lo dispuesto en la LTAIBG, así como por las disposiciones que la desarrollan y por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 919/2014 de 31 de octubre.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y por el Presidente del Consejo, que lo será también de su Comisión, según lo dispuesto en el artículo 35 LTAIBG.

Las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que vienen recogidas en el artículo 38 LTE y en el artículo 3 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, son las siguientes:

- **Adoptar** recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley de transparencia.

- **Asesorar** en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- **Informar** preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o que estén relacionados con su objeto.

- **Evaluar** el grado de aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

- **Promover** la elaboración de borradores, de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- **Promover** actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- **Colaborar** con órganos de naturaleza análoga en las materias que le son propias.

También tiene función jurisdiccional, ejercida a través de las resoluciones de Reclamaciones con el objetivo de controlar el cumplimiento de la LTAIBG.

Y además, aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

Para el debido cumplimiento de estos fines, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuenta con las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo y cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

Al mismo tiempo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula el artículo 24.6 de la LTAIBG, “salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”.

3.2 Aspectos significativos de la doctrina establecida en 2017

En este apartado vamos a hacer referencia a aquellos aspectos significativos de la doctrina establecida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el año 2017 y más concretamente, sobre resoluciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el ámbito del empleo público. A su vez, nos vamos a centrar en aquellas resoluciones que hayan sido estimadas o , al menos, parcialmente, revelando así las malas prácticas de la Administración Pública que son reprendidas por el Consejo.

En primer lugar, este Consejo será competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información, el presidente o la presidenta, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014.

Nuestro foco va a estar dirigido a esa información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” - artículo 1 de la LTAIBG-.

De esta manera, se pueden considerar como malas prácticas relacionadas con el empleo público por parte de distintas Administraciones Públicas durante el año 2017 las siguientes:

La primera de ellas sería no revelar la lista de autorizaciones de compatibilidad para actividades de funcionarios, concretamente se solicita la siguiente información: *“Autorizaciones de compatibilidad para actividades de funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid concedidas durante los últimos cinco años haciendo constar las que están vigentes en la actualidad”*.

La primera cuestión a tratar es la relación existente entre las obligaciones de publicidad activa y el ejercicio del derecho de acceso a la información. Podemos encontrar en el artículo 12 LTAIBG el derecho de todas las personas a “acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, entendida dicha información en un sentido amplio, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

Sobre esta definición es necesario mencionar el CRITERIO INTERPRETATIVO CI/009/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con relación la Publicidad Activa y el Derecho de acceso a la información pública:

- I. De acuerdo con la LTAIBG, la publicidad activa y el derecho a la información son dos caras distintas de una misma realidad: la transparencia de la actividad pública. En un caso -publicidad activa, también llamada transparencia activa- se configura como una obligación de las instituciones y Administraciones públicas; en el otro -acceso a la información o transparencia

pasiva- se configura como un derecho de las personas, basado en el artículo 105 b) de la Constitución. En ambos casos la finalidad de la Transparencia es garantizar que los ciudadanos conozcan la organización y el funcionamiento de sus instituciones públicas. En este sentido, la publicidad activa ha de entenderse como un elemento facilitador de una serie de datos e informaciones que se entienden de interés general, de manera que puedan ser consultadas por aquellos que lo deseen sin necesidad de hacer una petición expresa[...]

II. A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que:

La definición de información pública accesible a través del ejercicio del derecho de acceso, que contiene el artículo 12 de la LTAIBG, no restringe en modo alguno el contenido de esa información por estar o no sometida al régimen de publicidad activa.

Además, en la Ley, la publicidad activa no lleva en ningún caso aparejada una obligación de consulta por parte de los interesados. Se trata de un instrumento que obliga a las Administraciones Públicas. Los ciudadanos y personas interesadas en ejercitar su derecho a saber, pueden consultar, si lo desean, la publicidad activa.

En la LTAIBG la publicidad activa se concreta en la publicación por los organismos o instituciones públicas de los datos e informaciones establecidos en las “correspondientes sedes electrónicas o páginas web”, o en el Portal de Transparencia de la Administración, bien que con una serie de características tendentes a hacerla actual, accesible, comprensible y de acceso fácil. Por su parte, el artículo 22.3 de la LTAIBG regula el supuesto genérico de que la información solicitada vía derecho de acceso haya sido objeto de publicación previa, supuesto que, indudablemente, incluye la publicación de esa información en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. En este sentido, señala que la resolución podrá limitarse a indicar el lugar o medio en que ésta se ha publicado[...]

De acuerdo con esto, la letra g) del artículo 8.1 de la LTAIBG prevé que las Universidades Públicas, en cuanto sujetos obligados por el artículo 2.1.d), “deberán hacer pública, como mínimo”, a través de alguno de los medios previstos en el artículo 5.4 de la LTAIBG, “la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación”, especificándose en la materia que ahora interesa lo siguiente:

“g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos [...]

De este modo, la información relativa a la materia de “resoluciones de compatibilidad” constituye una información de carácter económico o presupuestario de las previstas en el artículo 8.1.g) de la

LTAIBG que debe ser publicada de oficio por las entidades enumeradas en el artículo 2.1.d) de la LTAIBG, entre las que se encuentran las Universidades Públicas, lo que no excluye, desde luego, que cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa información, pudiendo la Universidad, en tal caso, remitir bien al solicitante a la dirección URL en la que se encuentra publicada la misma, bien copia de la información de que se trate.

En función de todo lo argumentado en este punto, se estima la reclamación planteada en tanto y cuanto su objeto versa sobre información pública en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG.

De la misma manera, en la Resolución RT/0057/2017, sobre información sobre autorización de compatibilidades, en la que se solicita *copia de la resolución rectora de reconocimiento para el desempeño de los cargos de administrador, presidente, consejero delegado o secretario en sociedades mercantiles o empresas y copia de las resoluciones de compatibilidad para el ejercicio de esas actividades desde 2005 hasta la actualidad*.

Se estima la reclamación presentada, por entender que la información solicitada se trata de información pública en poder de un sujeto obligado y se insta a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a que en el plazo máximo de quince días proporcione la información solicitada y no satisfecha y a que, en igual plazo, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia del cumplimiento de esta Reclamación.

En este sentido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya ha tenido ocasión de señalar que la LTAIBG habla expresamente de que lo que se debe publicar son las resoluciones de compatibilidad. Indirectamente el Consejo nos está diciendo que las autorizaciones de compatibilidad tienen sentido de cara a la transparencia cuando figuran en un listado. Además, dice que “[...] lo que no puede es sustraerse de la información a publicar datos esenciales para cumplir con el objetivo de la Ley, que no es otro que el conocer la identidad de los funcionarios públicos que compatibilizan su actividad pública con otra privada. En efecto, la previsión que realiza la LTAIBG de que se publicarán las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad implica que se conozca la identidad del beneficiario de dicha autorización y que estemos ante un supuesto amparado por la previsión del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), que prevé que el consentimiento del titular de los datos no será necesario para la cesión de los mismos cuando dicha cesión de datos esté prevista en una norma de rango legal”-Fundamento de Derecho 4 de la Reclamación número R/0075/2016, de 17 de mayo-, por lo que no se puede poner la pretensión de datos como excusa para no revelar la identidad de los funcionarios “compatibles”.

Un segundo caso es el que se refiere al proceso de selección del puesto de Director General de Radio Televisión Madrid,S.A, en el que se solicita *las normas establecidas en el proceso de selección, además de la puntuación obtenida por el solicitante respecto a la de la persona seleccionada para el puesto, los criterios de valoración de esa selección y el modelo de gestión propuesto.*

Pues bien, *en cuanto a los criterios solicitados*, desde una perspectiva material, se trataría de información pública en los términos del artículo 13 LTAIBG, dado que han debido ser elaborados por un ente incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG y, asimismo, han sido confeccionados en el ejercicio de sus funciones, criterios que delimitan el concepto de información pública a los efectos de la LTAIBG. El conocimiento de esta información, por lo tanto, ayudaría a controlar la existencia o no de criterios previamente identificados en base a los cuales el Consejo de Administración ha evaluado las solicitudes y su documentación anexa, para poder controlar la actuación de dicho Consejo y en definitiva, su decisión pública en el marco de procesos de selección de candidatos a dirigir un organismo público. Otro caso sería que no exista dicha identificación previa de los elementos mínimos o criterios fijados por el Consejo de Administración para evaluar las solicitudes presentadas, entiende este Consejo de Transparencia que, si bien no existiría información pública a la que acceder y la solicitud carecería de objeto. Respecto a la solicitud relacionada con la *puntuación obtenida*, serviría como refuerzo o apoyo para entender necesaria la existencia de unos criterios de evaluación previamente determinados por el Consejo de Administración.

Por lo tanto, debe enseñarse al reclamante los criterios fijados por el Consejo de Administración para evaluar las solicitudes presentadas, así como la puntuación obtenida por el ahora reclamante, o confirmar que se carece de dichos criterios o puntuación y, por lo tanto, que no existen criterios en los que se haya basado el Consejo de Administración para adoptar su decisión.

En cuanto al modelo de gestión propuesto, de acuerdo con lo previsto en la Base Cuarta del Acuerdo de 7 de noviembre de 2016 de convocatoria pública, todos los candidatos debían presentar, junto con su solicitud de admisión al concurso, “una propuesta de una extensión máxima de cinco folios, con el modelo de gestión que se propondría realizar al frente de la empresa Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima, en caso de ser elegido”. Resulta evidente que esta información no debe ser conocida por los potenciales candidatos antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que el Consejo de Administración proceda a valorar las solicitudes, dado que con ello se evita a posibles competidores conocer un documento que puede ser determinante en decantar el

criterio en el proceso de toma de decisiones del Consejo de Administración. Ahora bien, se deberán conocer las propuestas de los candidatos una vez concluido el proceso. El conocimiento del contenido de esa propuesta se configura, en definitiva, como un medio de controlar la decisión pública adoptada por el Consejo de Administración en orden a seleccionar un candidato cuya idoneidad es apreciada inicialmente en Comisión parlamentaria y, posteriormente, votada favorablemente por mayoría cualificada de la Cámara, sobre todo si, además, tenemos en cuenta que la única propuesta valorada por el órgano de representación parlamentaria es la procedente del precitado Consejo de Administración.

En definitiva, la Reclamación en este punto concreto queda estimada.

Un tercer caso sería el relativo a la solicitud del *Número de profesores en todos y cada uno de /os colegios rurales agrupados (CRA) de Castilla-La Mancha, desagregado por tipología de contrato (fijos, itinerantes, interinos, etc.)*.

El solicitante no solicitó *documentos que estén clasificados como secretos o reservados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales* y solicitó *la información en formato accesible (archivo .csv, .text, .x/s, o .xlsx)* o en caso de que no fuese posible, que se le entregue tal y como obre en poder de la institución, para evitar así cualquier acción previa de reelaboración.

En este caso, el Consejo ha de analizar un aspecto de carácter formal. Las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se encuentran en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20.1 que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.”

Se procede a estimar por motivos formales la Reclamación presentada, por entender que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha incumplido los plazos previstos en la LTAIBG, por lo que resulta estimada por motivos formales y esto nos priva de un criterio sustantivo del Consejo, que es lo realmente útil a efecto de la doctrina.

Lo mismo ocurre con otra Resolución que tiene como asunto la cobertura de una plaza en residencia de mayores de la Comunidad de Madrid. Se solicita “*saber si a día de la fecha se ha cubierto por la*

Consejería de Asuntos Sociales la plaza individualmente y en concreto que a continuación se especifica con sus detalles de cómo se ha cubierto". Se estima la reclamación planteada por motivos formales, puesto que, a pesar de que se ha facilitado la información en fase de alegaciones en el procedimiento de tramitación de la reclamación, lo apropiado hubiera sido contestar directamente al solicitante en el plazo legalmente establecido de un mes desde que la administración autonómica recibió la solicitud de acceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LTAIBG.

Otro supuesto que cabe analizar tiene que ver con el uso de las horas sindicales en un Ayuntamiento. Se produce una estimación parcial, concretamente lo que la Administración debe enseñar es "el cómputo total de horas que tienen cada sindicato en virtud del número de representantes" ya que tanto como puede apreciarse en el Estatuto del Trabajador como en Estatuto Básico del Empleado Público, se establece una distribución de crédito de horas mensuales en función de una escala de número de funcionarios con relación a los "miembros de las Juntas de Personal" en su conjunto y por lo tanto, la atribución no se efectúa por concretas organizaciones sindicales sino por el total de miembros de la Junta y delegados de Personal.

En cuanto a la bolsa de empleo de Auxiliares Administrativos, se solicita al Ayuntamiento de Socuéllamos: *a) Información y copia de /as bases para la creación de la Bolsa de Auxiliares Administrativos en vigor. b) Base legal aplicada a esta Bolsa de Auxiliares Administrativos. c) Normas de funcionamiento de la Bolsa. d) Listado de personas que forman parte de la Bolsa de Auxiliares Administrativos en vigor.*

En primer lugar, cabe recordar que el artículo 8.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, enumera entre las clases de empleados públicos a los funcionarios interinos. De este modo, en el artículo 10 del TREBEP se abordan los aspectos esenciales de esta concreta clase de empleados públicos especificando su apartado 2 que su selección "habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad"

Delimitado en sus aspectos más genéricos el marco normativo aplicable a la selección de interinos a través de la constitución de la correspondiente bolsa de trabajo, la siguiente cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en determinar si el objeto de la solicitud de acceso a la información que ha originado la presente reclamación se configura como "información pública" a los efectos de la LTAIBG.

Por lo que respecta a la solicitud de acceso a la información relativa a las “*bases para la creación de la Bolsa de Auxiliares Administrativos*” -letra a) de la solicitud originaria de acceso- cabe advertir que se configuran como “información pública” a los efectos de la LTAIBG en tanto y cuanto concurren en las mismas los requisitos determinados por el legislador para considerar que se trata de información pública.

En primer lugar, dichas bases son elaboradas por, y obran en poder de, una entidad incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG. No cabe duda alguna, que los Ayuntamientos son entidades a las que se les aplican las obligaciones de publicidad activa y de publicidad pasiva previstas en la LTAIBG según se desprende de su artículo 2.1.a). En segundo lugar, se trata de información elaborada en el ejercicio de las funciones y competencias que el Derecho positivo - entre otras, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha- atribuyen en materia de empleo público a los Ayuntamientos. Se produce por lo tanto, la estimación por parte del Consejo de esta parte de la solicitud.

Sin embargo el Consejo desestima las peticiones contenidas en la letra b y c puesto que el derecho de acceso regulado en la LTAIBG no ampara supuestos de peticiones como las contempladas en tales letras a propósito de consultas sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto o aclaraciones de la normativa aplicable a un caso específico, dado que se trata de información inexistente a la fecha de la solicitud y, además, respecto de la cual existen otras vías de acceso - entre otras, Reclamación número R/0186/2015, de 9 de septiembre-.

Mención aparte merece la petición contenida en la letra d), relativa al “Listado de personas que forman parte de la Bolsa de Auxiliares Administrativos en vigor” ya que son datos que pueden tener la consideración de datos personales y pueden ser ocultados por la Administración.

Otro supuesto es el relativo a las actas de las comisiones de contratación y de traslados. Se trata de una solicitud de acceso a la información ante Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM) con relación a “*Todas las Actas de la Comisión de Contratación durante los años 2015 y 2016 y a Todas las Actas de la Comisión de Traslados durante los años 2015 y 2016*”. En un principio se inadmite la solicitud, se sostiene que las actas de las Comisiones Contratación y Traslados tienen carácter de documento interno, elaborado entre la Dirección de Castilla-La Mancha Media y los representantes de los trabajadores, a modo de informe que resume los temas tratados y las decisiones adoptadas en reuniones de trabajo. Se trata por tanto de documentación de apoyo, específicamente en el ámbito de las relaciones laborales, de forma se considera que sus

consecuencias (los traslados o contrataciones efectuadas, el reglamento de la bolsa de trabajo negociado) sí pueden, dentro de los límites establecidos por la LTAIBG, y por la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha, ser objeto de solicitud de información pública, las actas que reflejan una discusión interna, y que no resultan en modo alguno informe preceptivo, no deben serlo.

Se plantea por tanto el análisis de tres cuestiones: *i)* con carácter preliminar hemos de precisar si las Comisiones de Contratación y de Traslados se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la LTAIBG dado que se ha alegado que su especial carácter determina que la información solicitada no sea facilitada; *ii)* si las actas de este tipo de Comisiones se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG, en otras palabras, si puede ser objeto del derecho de acceso a la información; y *iii)* la causa de inadmisión contenida en el artículo 18.1.b) de la LTAIBG invocada por la administración autonómica.

Cabe recordar que el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda [...] Por tanto, cabe concluir señalando que las Comisiones de referencia se configuran como órganos colegiados de las Administraciones Públicas regulados en los artículos 15 a 18 de la precitada Ley 40/2015, de 1 de octubre, preceptos que tienen carácter básico, esto es, que resultan de aplicación a todas las Administraciones Públicas -estatal, autonómica y local-.

Además, el Consejo no duda de que la materia sobre la que se solicita el acceso a la información – copia de las actas de dos órganos colegiados- se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG dado que en ella se cumplen los dos requisitos requeridos por el artículo 13 de dicha Ley. En primer lugar, se trata de información elaborada en el ejercicio de las competencias en materia de personal atribuidas al ente. Y, en segundo lugar, se trata de información elaborada por una Corporación municipal, sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG a tenor de lo dispuesto en su artículo 2.1.

A su vez, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas legalmente por las letras a) y e) del artículo 38.1 de la LTAIBG, ha elaborado, ya

desarrollado anteriormente, el CRITERIO INTERPRETATIVO CI/006/2015, de 12 de noviembre, en el que se delimita el alcance de la noción de información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como causa de inadmisión de solicitudes de acceso a la información en el artículo 18.1.b) de la LTAIBG.

En primer lugar, la redacción del artículo 18 de la Ley 19/2013, establece una serie de causas que permiten declarar la inadmisión de una solicitud que, al tener como consecuencia inmediata la finalización del procedimiento, habrán de operar, en todo caso, mediante resolución motivada.

Por tanto, será requisito que la resolución por la que sea inadmitida la solicitud, especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicable al caso concreto.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la redacción del artículo 18.1.b), cabe concluir que es la condición de información auxiliar o de apoyo la que permitirá, de forma motivada y concreta invocar una aplicación de la causa de exclusión, siendo la enumeración referida a “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos administrativos” una mera ejemplificación que, en ningún caso, afecta a todos los conceptos enumerados sino a aquellos que tenga la condición principal de auxiliar o de apoyo.

Así pues, es el carácter auxiliar o de apoyo de este tipo de información y no el hecho de que se denomine como una nota, borrador, resumen o informe interno lo que conlleva la posibilidad de aplicar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013.

En tercer lugar, este Consejo de Transparencia entiende que una solicitud de información auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, podrá ser declarada inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, no todas o varias a la vez, de las siguientes circunstancias:

1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad.
2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final.
3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud.
4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento.

5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final.

Por último, debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013, para qué operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue la información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación. Éstas en ningún caso tendrán la condición de informaciones de carácter auxiliar o de apoyo.

La interpretación de las causas de inadmisión al caso concreto ha de llevarse a cabo a través de la subsunción, de acuerdo con la cual a “un supuesto de hecho” le corresponde “una consecuencia jurídica”. De acuerdo con ello, la forma de proceder en el presente caso consistirá, precisamente, en esclarecer si la información objeto de esta reclamación se trata de una “*información auxiliar*” o “*de apoyo*” –supuesto de hecho- a fin de determinar si resulta de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.b) LTAIBG -consecuencia jurídica-.

En las alegaciones remitidas se considera que las actas, al no tener carácter preceptivo, se tratarían de información auxiliar o de apoyo. No se puede compartir el criterio de la administración autonómica en este punto concreto. En efecto, tal y como hemos señalado con anterioridad, partiendo del concepto amplio de “información pública” regulado en el artículo 13 de la LTAIBG, las actas de órganos colegiados se configuran como “información pública” y así ha sido interpretado por el Consejo en diferentes Resoluciones -entre otras, las números de referencia RT/0151/2016, de 16 de noviembre, respecto de actas de la mesa de contrataciones central y de la comisión de bolsas del servicio de salud del Principado de Asturias; RT/0042/2017, de 28 de abril, relativas a las actas del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, etc.-. Con ello, además, se quiere poner de manifiesto que en las actas de órganos colegiados no concurren las circunstancias que han inducido a entender que resultaba de aplicación la causa de inadmisión del artículo 18.1.b) -cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad, cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final, cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud, cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento y, finalmente, cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final-. Procede, en consecuencia, estimar la Reclamación

planteada y enseñar las actas de una comisión integrada en una Administración relativas a los procesos de selección.

De la misma manera, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procede a estimar la Reclamación RT/0093/2017, en relación con actas del Comité de Seguridad y Salud de RTVCM, sin perjuicio de lo cual, el Consejo considera conveniente recordar que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública habrá de realizarse en los términos del artículo 15.4 de la LTAIBG, esto es, anonimizando los posibles datos de carácter personal que contengan las actas. Además, el Consejo advierte de que, a tenor de lo previsto en el artículo 15.6 de la LTAIBG, “La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”. Ello obliga al receptor de la información a no revelarla a terceros so pena de que se le apliquen las sanciones de la LOPD.

Otro supuesto es el relativo a la relación Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Tras poner de manifiesto la solicitante que en el Portal de Transparencia aparece solamente parte de la información contenida en el documento Relación Puestos de Trabajo RPT de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, solicita: *Copia completa de la RPT de la Consejería de Medio Ambiente a fecha de hoy, omitiendo sólo /os datos personales, incluyendo el campo referido a cada plaza que indica si está ocupada en propiedad, de manera provisional o vacante. Si parte de la información apareciese codificada, se solicita el significado de cada código.* Se inadmite la solicitud de información argumentando que la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, con los datos legalmente exigidos, aparece en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, pero la solicitante no ha pedido los datos mínimos sino el contenido completo del documento actual denominado internamente como "Listado de trabajo de Relaciones de puesto de trabajo" Además, se hace constar asimismo que la información publicada en el portal no incluye la fecha de su actualización ni el significado de cada código, que se han solicitado expresamente en la solicitud.

En consecuencia, el Consejo estima la reclamación planteada en tanto y cuanto su objeto versa sobre una materia que se configura como “información pública” que ha sido elaborada por una Administración Pública en el ejercicio de sus funciones. Dicho esto, sin embargo, se formula una observación general sobre el acceso a la información solicitada. En efecto, sin perjuicio de que el campo "tipo cobertura" - en cuanto se refiere a la forma de provisión del puesto de trabajo mediante libre designación, concurso, etc.-, la "unidad orgánica" a la que queda adscrito (Área, Sección, etc)

a fin de conocer los puestos de trabajo de cada Cuerpo/Escala/Especialidad en cada unidad orgánica, y cuantos están ocupados con carácter definitivo, provisional o vacantes sin cubrir es una información de la que dispone la Administración, tal y como se deduce de la copia del "Listado de trabajo de Relaciones de puesto de trabajo" aportada por la reclamante, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el CRITERIO INTERPRETATIVO CI/001/2015, de 24 de junio de 2015, elaborado conjuntamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, en desarrollo de las funciones previstas en la Disposición adicional quinta de la LTAIBG, sobre las obligaciones de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a la información pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que resultan de aplicación igualmente al caso que nos ocupa.

En concreto, su epígrafe 1 alude a las siguientes reglas generales que habrán de ser tenidas en consideración por la administración autonómica para suministrar la información pretendida por la reclamante en ejecución de esta resolución:

1- Información referida a las RPT, catálogos, plantillas orgánicas, etc... de los órganos, organismos públicos y entidades del sector público estatal enumerados en el artículo 2 de la LTAIBG.

A. En principio y con carácter general, la información referida a la RPT, catálogo o plantilla orgánica, con o sin identificación de los empleados o funcionarios públicos ocupantes de los puestos (información que debe mostrar la Administración) se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano de modo que, conforme al artículo 15, número 2, de la LTAIBG, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación, se concederá el acceso a la información

B. Ello no obstante y en todo caso:

a) La información –siempre en el supuesto de que resulte obligado facilitarla conforme a las reglas del anterior apartado A- no se facilitará cuando el acceso suponga un perjuicio para uno o varios de los bienes enumerados en el artículo 14.1 de la LTAIBG y la limitación sea justificada, proporcionada a su objeto y finalidad de protección y haya tenido en cuenta las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia en el mismo de un interés superior que justifique el acceso.

b) Tampoco se facilitará cuando el acceso afecte a uno o varios empleados o funcionarios públicos que se encuentren en una situación de protección especial –p. ej. la de víctima de violencia de

género o la de sujeto a una amenaza terrorista-, que pueda resultar agravada por la divulgación de la información relativa al puesto de trabajo que ocupan.

En este último caso, si el órgano, organismo o entidad responsable de la información tuviera conocimiento o pudiera deducir razonablemente de la información de que dispusiese que alguno o algunos de los empleados concernidos por una solicitud de información pudiera hallarse en una situación de protección especial, deberá recabar del o los afectados la información necesaria para dilucidar si efectivamente se da el supuesto y proceder en consecuencia con la respuesta.

Otro caso atiende a la cobertura de plazas de conductor de instalaciones. El reclamante solicita al Servicio de Salud del Principado de Asturias -SESPA- *el acceso al expediente de cobertura de las plazas de conductor de instalaciones, salvaguardando la protección de datos requerida en el artículo 15, en ejercicio del derecho de acceso a la información reconocido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, o en su caso se me comuniquen por escrito, la fecha de cobertura de las plazas, la forma de provisión, la titulación requerida para la misma, la fecha de publicación de la oferta de dichas plazas ya sea abierta o por promoción interna, así como la fecha de publicación en el BOPA de la resolución resolutoria de cualquiera que haya sido la forma de provisión de las plazas, bien concurso, la comisión de servicios o libre designación. A su vez también se solicita la convocatoria de todas las plazas de conductor de instalaciones de acuerdo a la forma de provisión de concurso de méritos, que me permitan ejercer mi derecho a la promoción individual, así como, que el SESPA cumpla con su obligación de que las plazas se cubran de acuerdo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.*

En primer lugar, por lo que se refiere al “acceso al expediente de cobertura de las plazas de conductor de instalaciones” hay que precisar que su objeto, según se desprende de los datos obrantes en el expediente concretados en la parte expositiva de la originaria solicitud de acceso a la información, consiste en el acceso a los expedientes de las distintas convocatorias en virtud de las cuales se haya procedido a la cobertura de las 20 plazas de conductor de instalaciones de la plantilla del SESPA que se encuentran cubiertas en la actualidad. Preciado en los términos anteriores el objeto de la pretensión, el Consejo estima la reclamación presentada en este punto concreto, ya que la información solicitada no cabe duda que se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG. En efecto, en ella concurren los dos presupuestos de hecho que el vigente artículo 13 de la LTAIBG ha identificado para considerar que estamos en presencia de información que merezca tal calificación: por una parte, se ha elaborado en el ejercicio de las funciones que en materia de selección de personal se atribuye a las administraciones públicas por el vigente ordenamiento

jurídico -entre otras normas, ténganse en cuenta lo previsto en los artículos 70 y 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y, finalmente, el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los sistemas de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos intermedios en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias-; mientras que, por otra parte, se trata de información que ha de obrar en poder de un sujeto incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la propia LTAIBG -a estos efectos, téngase en cuenta lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias a propósito de su naturaleza como entidad de Derecho Público en relación con el artículo 2.1.c) de la LTAIBG-.

Otro caso es el que hace referencia al turno de discapacidad en Ofertas de Empleo Público. Se solicita al Ayuntamiento de Alcalá de Henares *información sobre el número de plazas ofertadas en el turno de discapacidad, en oposición, concurso-oposición o promoción interna celebradas en este Ayuntamiento en los grupos A1, A2, B, C1 o C2, que han sido ofertadas por este Ayuntamiento desde el año 2002 hasta la actualidad. (Si es que hubiera habido alguna), si no las hubiese habido la no concurrencia de dichas plazas.*

En este caso concreto, en cuanto respecta a la relación entre publicidad activa y derecho de acceso a la información, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha elaborado el Criterio Interpretativo CI/009/2015, de 12 de noviembre, el cual hemos desarrollado anteriormente.

De acuerdo con ello, se deduce que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares disponía de dos posibilidades de actuación para satisfacer el derecho de acceso a la información del ahora reclamante: o bien enviarle la información solicitada, o bien remitirle la concreta dirección URL en la que se encuentra publicada la específica información contractual de referencia. Si nos atenemos a la información que obra en el expediente, la corporación municipal no ha contestado al ahora reclamante por alguna de las dos vías indicadas, motivo por el que, procede estimar la reclamación planteada y declarar el derecho de acceso a la información solicitada por aquél.

Por último, en el caso que atiende a los expedientes administrativos de provisiones de puestos de trabajo, el reclamante solicita *copias completas y auténticas de los expedientes administrativos relativos a las provisiones de los puestos de trabajo del personal laboral, nombrado por libre designación y relacionados anteriormente, del personal que actualmente ocupa los mismos.*”

A mayor abundamiento, resulta evidente que de todo proceso de provisión de puestos de trabajo ha de elaborarse un expediente administrativo en los términos del artículo 70.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a tenor del cual, “se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”.

No cabe duda alguna que la materia sobre la que se solicita el acceso a la información se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG dado que en ella se cumplen los dos requisitos requeridos por el artículo 13 de dicha Ley. En primer lugar, los expedientes de provisión de puestos de trabajo se trata de información elaborada en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Corporación municipal en materia empleo público, si atendemos, entre otros, a los artículos 89 y siguientes de la LrBRL. Y, en segundo lugar, se trata de información elaborada por una Corporación municipal, sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG a tenor de lo dispuesto en su artículo 2.1.a).

De acuerdo con ello, y dado que la administración municipal no ha planteado la concurrencia en el supuesto que ahora nos ocupa de alguna de las causas de inadmisión de solicitudes de acceso a la información previstas en el artículo 18 de la LTAIBG y, asimismo, tampoco ha alegado la existencia motivada y justificada de límite alguno de los enumerados en el artículo 14 de la misma norma, procede estimar la Reclamación planteada y, en consecuencia, declarar el derecho de acceso del reclamante a la información solicitada.

En definitiva, lo que la Administración debe enseñar en este caso es el expediente de provisión de puestos de trabajo, en el que pueden figurar datos de carácter personal, como el documento nacional de identidad, domicilio, etc., y la administración municipal deberá anonimizar aquellos datos según se desprende del artículo 15 de la LTAIBG antes de formalizar el derecho de acceso.

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos analizado las causas de las malas prácticas existentes en la Administración Pública, en el ejercicio de dar respuestas a los ciudadanos que solicitaban una determinada información pública, así como las Resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano independiente que han dado la razón al ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso reconocido en el artículo 105. b de la Constitución Española y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Mayoritariamente, la causa de malas prácticas por parte de la Administración, y por lo tanto el motivo de la Reclamación por parte del ciudadano, es el silencio administrativo, esto es, por incumplir el deber de notificar al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Plazo que puede ser ampliado por otro mes en caso de ser necesario por el volumen o la complejidad de la información, siempre previa notificación al solicitante. En todo caso, un incumplimiento reiterado de las resoluciones en plazo por parte de la Administración tendrá la consideración de infracción grave.

En otras ocasiones nos encontramos con la situación de que la Administración proporciona al solicitante una información que no es conforme a la previamente solicitada por este. En estos casos el solicitante podrá plantear una nueva reclamación al amparo del artículo 24 LTAIBG al considerar que la respuesta ofrecida no satisface la solicitud formulada. Entre ambas solicitudes debe existir una identidad de objeto, que no será otro que reivindicar el derecho de acceso a la información planteada en un primer momento.

Por último, otra causa bastante común en las las Reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se trata de solicitudes denegadas por ser subsumibles en las causas de inadmisión previstas en el artículo 18 de la LTAIBG, asunto que dará lugar a multitud de correcciones y argumentaciones a través de diferentes criterios interpretativos del Consejo que hacen considerar información pública y por lo tanto accesible al ciudadano determinadas informaciones.

5. BIBLIOGRAFÍA

1. MIR PUIGPELAT, O, “ El acceso a la información pública en la legislación española de transparencia: crónica de un cambio de paradigma”, *Revista catalana de dret públic*, num 55, 2017.
2. MORETÓN TOQUERO, A, “Los límites del derecho de acceso a la información pública”, *Revista jurídica de Castilla y León*, número 33, Mayo 2014.
3. Resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
 - RT_0006_2017, de 3 de abril de 2017
 - RT_0008_2017, de 6 de abril de 2017
 - RT/0257/2016 y RT/0035/2017, de 23 de febrero de 2017
 - RT_0057_2017, de 12 de mayo de 2017
 - RT_0082_2017, de 16 de junio de 2017
 - RT_0084_2017, de 9 de junio de 2017
 - RT_0093_2017, de 22 de junio de 2017
 - RT_0094_2017, de 20 de junio de 2017
 - RT_0125_2017, de 6 de octubre de 2017
 - RT_0128_2017, de 4 de octubre de 2017
 - RT_0152_2017, de 19 de junio de 2017
 - RT_0178_2017, de 31 de marzo de 2017

